

4. Historia y ciencias sociales: América Latina

Gabrielle E. Kuenzli: *Acting Inca. National Belonging in Early Twentieth-Century Bolivia*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 2013. 194 páginas.

El sugerente título de este estudio, *Acting Inca. National Belonging in Early Twentieth-Century Bolivia*, inmediatamente guía nuestra atención hacia los procesos histórico-sociales por los que ciertos grupos indígenas han pasado con el objetivo de lograr una identificación étnica que les permita eventualmente obtener los derechos que conlleva la ciudadanía. Al leer este trabajo, obtenemos clara cuenta de que estas formas de identificación colectiva de ninguna manera son gratuitas, sino impuestas, asumidas, creadas, elegidas y/o negociadas. Dando prioridad a las voces de los aimara mismos, Kuenzli analiza las variadas formas en que miembros de este grupo participaron en la política nacional de Bolivia y cómo esas acciones se interrelacionaron y afectaron el proceso de definición del Estado-nación. De esta manera, la autora da visibilidad a un grupo hasta ahora poco estudiado a partir de sus propias concepciones e historia.

Dividido en cuatro capítulos que proceden cronológicamente, el análisis empieza con las condiciones encontradas al inicio de la guerra civil de 1899 y se extiende hasta los inicios del siglo xx. Durante aquella guerra en que los liberales –liderados por José Manuel Pando– se enfrentaron a los conservadores, los primeros obtuvieron el apoyo de algunos grupos aimaras, guiados por Pablo Zárate Wilka. Esa alianza resultaría productiva para los liberales, quienes lograron llegar al poder. Al final de la guerra, en 1899, sin embargo, el apoyo de los aimara a la causa

reformista no solo fue olvidado, sino que estos fueron estigmatizados por las nuevas élites en el poder como “indígenas rebeldes y bárbaros” que presentaban una gran barrera para alcanzar la deseada modernidad y prosperidad del país. En este sentido, es necesario recordar que en aquella época los habitantes nativos no gozaban del derecho de ciudadanía en Bolivia y que los aimara deseaban mejoras: creían tener derecho a mejores condiciones de vida, dada su participación en la guerra civil y se consideraban a sí mismos como un grupo que podía contribuir a la creación de un nuevo gobierno del país.

Con gran atención a los detalles, la autora muestra cómo, a partir de 1890, diversos grupos aimara mostraron su capacidad de agencia al intentar construirse identidades más favorables que aquella de “aimaras salvajes”. Entre los ejemplos mostrados por Kuenzli está el de los aimara de Umala, quienes se separaron por medio de la utilización de una forma de identificación local –distanciándose del líder Zárate Wilka– y se presentaron como patriotas que apoyaban la creación del Estado de Bolivia, aunque utilizando un discurso auto-denigrante en que se posicionaban como incapacitados para siquiera idear un movimiento contra el gobierno, y mucho menos aspirar a asumirlo.

La opción más fructífera para evitar la discriminación social, sin embargo, sería la de reescribir el pasado aimara dentro del inca, ya que el segundo gozaba de alta estima entre las clases superiores. La historiadora documenta meticulosamente el proceso por el cual tanto intelectuales criollos como indígenas, echando mano de antiguos discursos e imaginarios, construyeron la imagen de los aimara como antecesores de los incas; no obstante, las

élites consideraban a los actuales aimara como un grupo que había caído en la total degeneración. A pesar de sus claroscuros, esta asociación fue utilizada por los nativos para mejorar su situación. La escritora demuestra claramente cómo el desarrollo de ese discurso del “indígena preferido” respondía tanto a propuestas congénitas como a construcciones de raza entonces vigentes. Aquí es donde, desde mi punto de vista, habría sido interesante ver algunos estudios de caso con más detalle. Una buena parte del libro mira detalladamente las condiciones que facilitaron la creación del performance del pasado inca, el cual fue adoptado por una importante parte de la élite aimara en Caracollo, en el departamento de Oruro. Hasta nuestros días, como demuestra Kuenzli, las producciones teatrales de aquella zona dan testimonio de los medios por los que los nativos se perfilaron a sí mismos como incas con el objetivo de poder ser aceptados como parte de la nación boliviana.

Aunque se concentra en presentaciones teatrales, Kuenzli no olvida otros medios importantes, como la caricatura, la tradición oral, las representaciones visuales y discursivas que pueden ser encontradas en sellos oficiales, o los pósters, por mencionar algunas de las novedosas fuentes a que recurrió. Otro aspecto positivo de este trabajo es el que la autora revisitó desde una nueva perspectiva documentos históricos, como los nueve volúmenes que contienen el juicio contra los aimaras acusados de rebelión por el Partido Liberal después del final de la guerra. Es así que el empleo de una metodología amplia genera en este libro una imagen mucho más clara y rica del papel desempeñado por los aimara en la guerra civil, de los métodos que emplearon para construir sus varias identidades étnicas, y algunas de las repercusiones de esos fenómenos hasta el presente. Este libro interesará no solo a los estudiosos

del área andina, sino también a aquellos interesados en procesos de identificación grupal.

*Alma Durán-Merk
(Universität Augsburg)*

Pilar García Jordán (ed.): *La articulación del Estado en América Latina. La construcción social, económica, política y simbólica de la nación, siglos XIX-XX*. Barcelona: TEIAA / Universitat de Barcelona 2013. 264 páginas.

Nos encontramos ante un libro editado por Pilar García Jordán, catedrática de Historia de América en la Universitat de Barcelona, que recopila algunos de los trabajos presentados en Barcelona los días 21 y 22 de noviembre de 2012, en un Simposio organizado por el Taller de Estudios e Investigaciones Andino-Amazónicas (TEIAA) relativos al Estado en América Latina. Se trata de un conjunto de estudios que cronológicamente abarcan 150 años, desde comienzos del siglo XIX, hasta mediado el XX. Iniciado con una introducción de la propia coordinadora, el libro se compone de nueve trabajos que abordan diferentes situaciones, cronológicas y geográficas: Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala y Paraguay.

Respecto a los contenidos concretos de la obra, el primer trabajo es el de Chiara Vangelista (Università degli Studi di Genova), que estudia en el territorio fronterizo de Mato Grosso (Brasil) la articulación territorial y demográfica en el período comprendido entre 1860 y 1954. Un espacio enorme, lejos de la zona costera de poder en Brasil, lo que resultó ser un elemento que permitió a sus propias élites políticas y económicas mantener el poder y liderar el acercamiento a los centros estatales de decisión política.

En el siguiente trabajo, Antonio Acosta Rodríguez (Universidad de Sevilla) aborda el papel que desempeñó la oligarquía de origen alemán en una zona específica de Guatemala en la conformación del Estado a finales del siglo XIX. En estos dos trabajos se analiza el papel de las clases dirigentes y la estrecha relación existente entre su rol socio-político y económico en la conformación de las estructuras políticas y administrativas en dos Estados, aparentemente tan diferenciados, como Brasil y Guatemala.

En el tercer capítulo, se estudia el papel de la mujer en este proceso de conformación de los nuevos Estados. Cynthia Folquer (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino-Tucumán) aborda la participación socio-política de las mujeres en la provincia de Tucumán a finales del siglo XIX. Un papel reforzado por el progresivo traslado de la mujer del ámbito privado al público, visualizado con claridad en el mercado laboral y el incremento del número de mujeres que desarrollan actividades remuneradas en el mercado laboral.

Barbara Potthast (Universität zu Köln) presenta el cuarto trabajo, un estudio basado en las obras catequéticas que en el ámbito político utilizaron los primeros presidentes paraguayos en los dos primeros tercios del siglo XIX. Instrumentos que fueron reflejando, a medida que avanzaba el siglo, los intereses estratégicos del poder político a la hora de reafirmarse en el mismo.

Anna Güteras Mombiola (Universitat de Barcelona) estudia las tensiones políticas a nivel local y departamental en el área de la Amazonía boliviana en los primeros veinte años del siglo XX. Una vuelta al papel del conflicto entre las élites políticas en la conformación de la estructura político-administrativa de este país, que precisamente por ese origen que podríamos calificar de "conflictivo" acabó siendo extremadamente débil.

La investigación de Pilar García Jordán (Universitat de Barcelona) aborda el trato que durante un siglo, la segunda mitad del XIX y la primera del XX, le dieron a los guarayos los dos focos fundamentales de poder en la Bolivia republicana; por un lado el propio Estado, y por otro, la Iglesia. Esta situación ejemplifica cómo la consolidación y articulación de estructuras políticas estatales dejó en muchos casos a parte importante de la población fuera de los avances económicos, sociales y políticos, que aún con muchas dificultades en algunos casos, se iban produciendo.

Gabriela Dalla-Corte Caballero (Universitat de Barcelona) trata en su trabajo la utilización por parte del Estado argentino de la Iglesia para generar un sentimiento de pertenencia a un Estado que se está conformando en un área remota de Argentina, como es la provincia de Formosa, fronteriza con el Chaco paraguayo. Ámbitos en los que se recuperó en el Chaco el papel de las misiones de carácter religioso para afianzar el espacio político y administrativo, pero también el social y económico.

En el trabajo de Lea Geler (Universidad de Buenos Aires) la política de consolidación y uniformización de la Argentina moderna se traslada de la frontera al mundo urbano de Buenos Aires. En este caso a través de la lenta y dificultosa integración en el moderno Estado argentino de la población de origen africano, donde a pesar de la intensa modernización económica de ciertos sectores sociales y económicos, continuaban entre los siglos XIX y XX situaciones raciales de discriminación que afectaban indirectamente al conjunto de la sociedad.

Por último, Cielo Zaidenweg (Universitat de Barcelona) se traslada al sur de Buenos Aires, a la provincia de Río Negro, donde estudia el papel del sistema educativo en el primer tercio del siglo XX. Un instrumento fundamental a la hora de

intentar homogeneizar un Estado que recibía enormes contingentes de inmigrantes procedentes de muy diversos países de Europa, buscando el reforzamiento de un sentimiento colectivo identitario propio por encima de los orígenes nacionales de cada contingente migratorio.

Los diferentes trabajos ponen de manifiesto que no resultaba posible, o que al menos resultaba enormemente complicado, construir una arquitectura institucional de los nuevos Estados a través de la combinación de determinados principios básicos de un Estado complejo; sobre todo, identidad y cohesión. Los agentes implicados en estos procesos pudieron ser muchos, desde las élites económicas, hasta las órdenes religiosas, las mujeres, las minorías raciales, la educación nacional, etc. Se intentó construir un Estado moderno sobre las bases de la pluralidad identitaria de sus nacionalidades, regiones y clases sociales, pero los resultados han dejado en demasiados casos, mucho que desear. En todos los trabajos subyacen problemas de desarrollo que los diferentes Estados en muchos casos no han sido capaces todavía de resolver, a pesar de que hablamos en algunos de los estudios de situaciones que se produjeron hace casi dos siglos. Problemas e ineficacias a la hora de ordenar la vida colectiva de sociedades enormemente complejas; nos encontramos tensiones sociales, de clase, económicas, raciales, administrativas, tensiones autonomistas frente a las pulsiones neocentralistas de estructuras estatales que cada vez tienen más peso. Las asignaturas pendientes a la hora de articular el Estado en América Latina siguen siendo en buena medida las mismas en su base, aunque evidentemente modificadas en su superficie por los cambios que se han ido produciendo a lo largo de los dos últimos siglos. La búsqueda de modelos cooperativos y plurales como vía idónea para dar

respuesta a las legítimas diferencias que hoy se mantienen y compiten en el seno de los diversos Estados.

Abel Losada
(Universidade de Vigo)

Martha Ruffini / Alejandra Salomón (comps.): *Estado, políticas públicas y ciudadanía en el mundo rural*. Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi 2014. 238 páginas.

Este libro es una compilación estructurada de la siguiente manera: un estudio introductorio a cargo de las compiladoras, y doce capítulos de autores que provienen de distintas disciplinas y abarcan diferentes problemas referidos al mundo rural. Excepto un capítulo sobre Brasil y otro sobre Perú, los artículos se centran en regiones y problemas de la Argentina. La publicación está dividida en dos secciones, según consignan las compiladoras en la Introducción, pero el índice no da cuenta de ellas. La primera abarca los siete primeros capítulos y se titula “Políticas públicas y ciudadanía”. La segunda contiene los cinco restantes y se denomina “Actores sociales, discursos y representaciones”. Ruffini y Salomón introducen el problema del Estado y la interacción con la sociedad que implican las políticas públicas, plantean que la década del noventa, con sus políticas neoliberales, supuso un parteaguas, pero sin precisar cuál es la definición de Estado que las guía. Esto se debe sin duda a la heterogeneidad de los artículos que componen el libro, en el que cada autor adoptará una visión diferente, ya sea desde el marxismo, el estructuralismo, el ambientalismo o el derecho. El concepto de ciudadanía en el espacio rural tampoco queda definido, aunque se refiere a la construcción histórica y social del

mismo. Por lo tanto, no hay un tipo ideal que se deba rastrear en el tiempo, sino una multiplicidad de casos que los autores irán definiendo.

El primer capítulo se titula “La incidencia de las políticas públicas en la formación del mercado de fuerza de trabajo agrícola: Buenos Aires, 1895-1914”, obra de Pablo Volkind. El autor logra demostrar, en oposición a las concepciones neoclásicas, que el Estado tuvo un rol activo en la conformación de la estructura económico-social del período, particularmente como garante del funcionamiento del mercado de trabajo en beneficio de los intereses de las clases dominantes. El segundo capítulo es un estudio de caso escrito por Florencia Rodríguez Vázquez y titulado “Opciones diversificadoras se buscan... El temprano fomento de la fruticultura en Mendoza (1900-1918)”. La autora recorre los caminos de la clase dominante mendocina y su vínculo con el Estado en la búsqueda de la diversificación de negocios que complementarían la actividad vitivinícola. En “El rol social de la propiedad en la definición de la política agraria del peronismo (1946-1955)”, Mónica Blanco analiza de qué forma el Estado asignó un rol social a la propiedad privada y cuáles fueron las estrategias de los arrendatarios para valerse de la nueva legislación y los nuevos tribunales, al tiempo que los propietarios reaccionaron refugiándose en el poder judicial tradicional.

En el siguiente capítulo, Pedro Casiano Farias de Oliveira analiza la forma en que la clase dominante agroindustrial del Brasil dirigió y modificó el sentido de la ayuda y los programas estatales según su conveniencia entre las décadas de 1950 y 1970. El quinto capítulo, escrito por Natalia Scarselletta, lleva por título “Agricultura familiar: una cuestión política”. La autora intenta demostrar que la categoría agricultura familiar es una construcción

político-académica y no social, y que su significado varía con el tiempo en función de las políticas públicas adoptadas. A continuación, el trabajo de Valeria Íñigo Carrera, “Un cultivo para los gom”, recorre la relación entre esa comunidad, el Estado nacional y provincial y el cultivo del algodón desde fines del siglo XIX. Demuestra cómo el proceso de proletarianización tuvo continuidad con el de conversión de los aborígenes en ciudadanos, para finalmente ser desplazados por un nuevo paradigma productivo basado en la tecnificación. Desde una perspectiva sesgada por el derecho, Daniela Sánchez Enrique analiza en su trabajo la relación entre teoría y praxis en el campo de los derechos humanos, relacionándolo con el presupuesto estatal. La segunda sección se inicia con el trabajo de Vanderlei Vazeles Ribeiro sobre los cambios en el movimiento campesino peruano en los últimos sesenta años y sus diferentes formas de adaptarse a la cambiante realidad. Lucas Henrique Pinto demuestra en su trabajo cómo los movimientos sociales campesinos fueron agregando a sus reclamos de justicia social una perspectiva ecologista complementaria con su búsqueda de reducción de las desigualdades. Ayelén Dichdji establece el modo en que la revista *Expreso Imaginario* introdujo el problema medioambiental en el contexto dictatorial de fines de la década de los 70. El siguiente trabajo, de Ximena Carreras Doallo, se enmarca en el análisis del discurso en el primer peronismo, relacionando los conceptos tierra y agro como fundantes de la idea de nación. Por último, Fernando Sánchez realiza un estudio de caso en un distrito de la provincia de Entre Ríos, para dar cuenta de las transformaciones que sufrió su población en los últimos veinte años y cómo se gestaron las nuevas ruralidades.

En síntesis, el libro es una obra que aúna diferentes enfoques sobre la temática

propuesta y permite al lector tener una aproximación general a la cuestión, para poder posteriormente ahondar en la misma.

Leandro Gervini
(Universidad de Buenos Aires)

Cath Collins / Katherine Hite / Alfredo Joignant (eds.): *The Politics of Memory in Chile. From Pinochet to Bachelet*. Boulder / London: Lynne Rienner Publishers 2013. 279 páginas.

En el campo de la política de la memoria y el pasado, el ejemplo de Chile sigue siendo un caso emblemático donde las opiniones de los investigadores varían entre tildarlo de “modelo” para una política del pasado exitosa o de “ejemplo negativo”. En este debate, el libro presentado se transforma en una referencia obligatoria, ya que algunos de los expertos más reconocidos, sobre todo de ciencias políticas, entregan aquí un resumen actual de las investigaciones académicas. El libro aborda el proceso de democratización chileno, para entender cómo la política de la memoria influyó la cultura política actual en Chile. Al tratar el concepto de política de memoria, se hace referencia a su potencial simbólico para crear identidades colectivas, destacando su relevancia en la creación de una comunidad colectiva.

Después de un prólogo de Steve Stern y una introducción de los editores, donde hacen un resumen del desarrollo de la política de memoria en Chile entre 1990 y 2010, Alexander Wilde amplía el análisis sobre las épocas de memoria en dicho país, publicado en su importante artículo sobre las irrupciones de la memoria. Wilde constata dos épocas de memoria: entre 1990 y 1998, y de 1998 hasta 2010, cuando, tras el arresto de Pinochet en Londres, observa una acumulación de acciones estatales para fortalecer

la memoria acerca del pasado, algo nuevo hasta ese entonces. Sin embargo, advierte, con razón, que la política de memoria de Lagos y Bachelet tampoco siguió un plan estructurado a largo plazo, sino que se fue creando más bien como reacción a situaciones, presiones e iniciativas de grupos de la sociedad civil.

Cath Collins trata la política de prosecución de los victimarios y describe, al contrario de lo que muchos piensan, uno de los más activos y completos balances de prosecución judicial de perpetradores de crímenes durante una dictadura en el mundo. Ella también considera el arresto de Pinochet como el momento decisivo que llevó a los jueces chilenos de interpretar la ley de manera más abierta a los reclamos de los abogados de derechos humanos. A pesar de estos avances, que incluyen reformas estructurales, la autora deja claro que los juicios todavía dependen mucho de la voluntad de cada juez, por lo que no se puede hablar de un cambio estructural en el sistema judicial chileno.

Elizabeth Lira y Brian Loveman resumen sus trabajos sobre la tortura en Chile y demuestran que la dictadura heredó una tradición de tortura política cuyas raíces se encuentran en el sistema de la Inquisición colonial. Analizan cómo la política de memoria en Chile, después de 1990, logró poco a poco establecer que la tortura funcionó como un mecanismo sistemático y planeado bajo la dictadura. Este reconocimiento actual llevó a que la tortura ya no se considerara como un asunto menor de la política oficial (como se solía hacer antes de los años 70). Sin embargo, recomiendan realizar cambios más profundos en la cultura política chilena para erradicar definitivamente la tortura, cuya aplicación, en algunos casos, sigue vigente incluso en democracia.

Cath Collins y Katherine Hite revisan la política de memoriales en Chile y

analizan ejemplos de iniciativas de memoriales por parte del gobierno, de la sociedad civil y de grupos de víctimas, sin dejar de lado los intentos de contramemoria de grupos adherentes a la dictadura. Las autoras son conscientes de la complejidad que conllevan las distintas iniciativas, metas y acciones para establecer lugares de memoria y critican la distancia prudente de los gobiernos oficiales respecto de las iniciativas de memoria de la sociedad civil.

Alfredo Joiganat analiza el debate de los historiadores sobre el juicio histórico de Pinochet, con ocasión de sus funerales en diciembre de 2006. Constata que, por el momento y a pesar de existir muchas voces revisionistas, domina una visión degradante del dictador entre los historiadores, pero también alerta ante la posibilidad de que un revisionismo histórico con una versión positiva de Pinochet no está excluido de una memoria futura.

Carlos Huneeus y Sebastián Ibarra demuestran, a partir de los datos de encuestas del CERC (Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea), que en Chile rige una memoria dividida bastante estable a lo largo del proceso de democratización. Las visiones acerca de la dictadura y de la figura de Pinochet se dividen claramente por preferencias políticas, con una mayoría que rechaza la figura de Pinochet y tiene una imagen negativa de la dictadura, pero una estable e importante minoría, que muestra su adhesión al general y a su régimen.

En el epílogo, los editores concluyen que, a pesar de los intentos de los gobiernos de crear una memoria de consenso, aún no se ha llegado a un acuerdo en la sociedad chilena de cómo recordar la dictadura. En la actualidad son los movimientos estudiantiles los que con más énfasis cuestionan el legado de la dictadura (que persiste sobre todo en el modelo económico del régimen) y, con ello, también la idea de una memoria de consenso. Sin embargo,

los estudiantes no encuentran respuestas adecuadas en los partidos políticos tradicionales. Esta conclusión, que también menciona otra vez los intentos de contramemoria, refleja una visión crítica de los editores respecto del proceso de democratización en Chile que, sin olvidarse de subrayar los logros existentes, lleva a un balance ambivalente de la política de memoria. Por esta razón, se puede concluir que si bien Chile ciertamente no representa un ejemplo negativo de política de memoria, tampoco podemos hablar, sobre todo por la falta de una política estructurada a mediano y largo plazo, de un modelo a seguir. Sin embargo, el caso chileno puede servir como un elemento importante para un análisis comparativo con otros procesos de democratización, por lo que este libro significa una contribución insoslayable.

Stephan Ruderer
(*Universität Münster*)

Philipp Altmann: *Die Indigenenbewegung in Ecuador. Diskurs und Dekolonialität*. Bielefeld: transcript Verlag 2014. 348 páginas.

Desde finales de los años 70 del siglo xx, el movimiento indígena ecuatoriano no solo luchó por sus derechos básicos como tierra, agua, educación, participación, autonomía cultural y territorial, justicia social y económica, sino paralelamente a la organización y a la formación de la conciencia indígena a nivel nacional, produjo una gran cantidad de textos programáticos. Los indígenas introdujeron en el debate sobre sus demandas los conceptos de territorialidad, plurinacionalidad, nacionalidad e identidad; más tarde adaptaron, además, los términos interculturalidad y “buen vivir”. Probablemente, el concepto del “buen vivir” fue desarrollado en Bolivia.

En Ecuador, los sarayaku-quechuas de la Amazonía fueron los primeros en usarlo en el debate político. Su definición es poco precisa; significa vivir en armonía con la naturaleza y los recursos del territorio utilizando formas de producción consistentes con ellos. Ya en 1994 la CONAIE había planteado una demanda parecida al “buen vivir”.

El trabajo programático de las organizaciones, especialmente de la CONAIE, alcanzó un nivel discursivo bastante estable, de conceptos y definiciones relativamente precisos componiendo un proyecto político con el objetivo, a largo plazo, de transformar la sociedad ecuatoriana y su Estado uninacional en un Estado plurinacional. Al contrario de lo que sospechó la oposición, la CONAIE no abogó por una destrucción del Estado nacional, sino por democratizarlo desde dentro y desde abajo, de tal manera que ejercería sus funciones equitativamente para todos los ecuatorianos y que habría participación plena de los indígenas, además de autonomía cultural y administrativa y de uso de los recursos naturales en sus territorios debidamente reconocidos.

En la primera parte del libro, Altmann reconstruye el desarrollo del Ecuador y del movimiento indígena desde el punto de vista de sus organizaciones con la finalidad de poder contextualizar los conceptos políticos clave. En la segunda parte, analiza el desarrollo histórico de estos conceptos y sus funciones en los discursos del movimiento. En la tercera, el autor cuestiona los conceptos y el discurso del movimiento indígena a la luz de su situación precaria y del sistema de poder real que viven los indígenas. En base a la teoría sobre el poder y la ciencia de la colonialidad de A. Quijano, Altmann concluye que el movimiento indígena es anticolonial y, por ello, sus demandas se dirigen en contra de esta colonialidad.

Los conceptos centrales de las demandas políticas son analizados por medio de lo que Altmann llama “begriffszentrierte Diskursanalyse”: una combinación entre la teoría discursiva de M. Foucault con la historia del desarrollo conceptual de R. Koselleck. Altmann usa como material para su investigación, que originariamente fue presentada como tesis doctoral a la Universidad Libre de Berlín, sobre todo textos oficiales de las organizaciones, complementados por documentos de fuentes secundarias y trabajos académicos. Su investigación es un trabajo muy minucioso (a veces algo reiterativo), que integra una enorme cantidad de material, sobre todo de la CONAIE y de fuentes secundarias. Por ende, los resultados sobre los discursos del movimiento indígena reflejan el punto de vista de sus élites y del personal directivo de las organizaciones y no el entendimiento discursivo de la base. Otra limitación, enunciada por el autor, es el análisis muy centrado en el discurso de la CONAIE, dada su posición hegemónica y al ser el mayor productor de documentos oficiales.

La CONAIE con sus filiales regionales (ECUARUNARI, CONFENIAE y CONAICE), aunque es la mayor organización con unos 900.000 miembros, no está presente en todas las partes del Ecuador (en un 60% a nivel cantonal y un 40% al parroquial). La FENOCIN y la FEINE, competencia de la CONAIE a nivel nacional, atacan, además, su discurso hegemónico trabajando con conceptos diferentes, como por ejemplo el término de interculturalidad (en vez de plurinacionalidad) para la composición multiétnica del país. Aunque hubo tiempos de lucha conjunta y de cooperación entre ambas organizaciones de cúpula y sus seguidores, en la Asamblea Constituyente 2007-2008 los conflictos fueron tales que tanto el término de interculturalidad como el de plurinacionalidad

fueron integrados sin mayor explicación en la nueva Constitución. El gobierno actual de Rafael Correa aprovecha las divisiones ideológicas entre las organizaciones indígenas y su competencia por membresías y por financiamiento. Desde su entrada en la arena política, Correa manipuló las organizaciones indígenas y sus demandas, debilitando sobre todo la posición de la CONAIE frente a sus bases y como actor socio-político en general.

Mechthild Minkner-Bünjer
(German Institute of Global and Area
Studies, GIGA)

Dag Mossige: *Mexico's Left. The Paradox of the PRD*. Boulder: First Forum Press 2013. 337 páginas.

Existen pocos escenarios políticos, escasas culturas político-institucionales que atraigan tanto interés como los de México. A la fascinación originaria del régimen político posrevolucionario y la hegemonía del PRI le ha seguido la que despierta la llamada transición democrática de las últimas décadas. En este contexto hay que situar la obra de Dag Mossige, una contribución indiscutible a la historia política reciente de México. No es la izquierda mexicana ("the Mexican Left") ni tampoco la izquierda en México ("the Left in Mexico") la que constituye su objeto de estudio, sino la izquierda de México, una izquierda que tiene características particulares, al punto que resulta problemático establecer equivalencias o continuidades demasiado directas con lo que el autor llama la izquierda internacional. Mossige descubre y analiza en su obra una tensión entre lo que podría ponerse en términos de la izquierda y lo mexicano. Básicamente, se trata de una historia atípica, ordenada en una secuencia no lineal pero basada en una

muy eficaz lógica narrativa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con especial atención al período comprendido en el último sexenio presidencial (2006-2012). Mossige realiza aportes decisivos en materia de documentación y de reconstrucción del proceso ideológico e institucional del PRD, pero también despliega un vasto campo de problematización que inicia prácticamente desde el título.

El análisis detallado de la campaña presidencial de 2006, en la que Andrés Manuel López Obrador, el candidato del PRD, denunciara un fraude nacional que le arrebató un supuesto triunfo, sirve para enlazar con la reconstrucción de los orígenes de dicha organización política. El PRD es fruto de un proceso que tuvo sus inicios más directos en otro hecho político trascendental de la historia reciente de México y que fue la elección presidencial de 1988. Entonces, la facción disidente de orientación nacional-revolucionaria del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), coaligada con fuerzas de izquierda decidió presentar una candidatura alternativa a la del PRI, que ya había iniciado un deriva ideológica hacia el neoliberalismo. Existen evidencias suficientes para afirmar que se practicó un fraude contra el candidato disidente, Cuauhtémoc Cárdenas, y en beneficio del oficialista, Carlos Salinas de Gortari, que alteró radicalmente el resultado de los comicios. El fraude electoral, por tanto, es el acontecimiento de origen del PRD, que ha marcado profundamente toda su historia.

Desde el principio, el PRD se planteó la necesidad imperiosa del cambio de régimen, objetivo que se concretaba en el fin de la hegemonía política indiscutida del PRI, y de encontrar las vías de acción más adecuadas para conseguirlo, en un contexto de democracia aparente o de un régimen de partido único amparado por un sistema de democracia formal. Las posiciones en torno al fin y los medios

generaron una tensión interna permanente, que Mossige se encarga de seguir y de analizar en cada uno de sus períodos e inflexiones. Un sector del PRD, partiendo de la constatación de las prácticas fraudulentas del partido gobernante, optó por una vía de movilización social, activismo y enfrentamiento directo con el gobierno, inclinándose por una forma de organización propia de movimiento, agrupado en torno a un liderazgo personalista de tipo caudillista. Otro sector prefirió la vía electoral, el reformismo, la negociación con el gobierno y otras fuerzas políticas, convencido de que el mejor aporte que se podía hacer al cambio de régimen era sostener un compromiso con las instituciones y aprovechar los resquicios del sistema para ir ganando poder territorial a través de las elecciones. Este sector buscaría fortalecer las formas de organización propias de un partido: instituciones y procedimientos claros de gobierno y acción, ideología definida, principios y plataforma de gobierno.

El conflicto interno del PRD hunde sus raíces en las diferentes perspectivas en torno a la proporcionalidad de los medios respecto de los fines. Mossige resume en dos extensos pero completos capítulos las alternativas del partido desde su fundación hasta los meses anteriores a la decisiva elección presidencial de 2006.

El autor describe cuidadosamente la dinámica interna del PRD, las posiciones encontradas, las alternativas del conflicto, la racionalidad interna de cada facción. Se advierte, más allá de su inclinación en favor de las posiciones reformistas, democráticas y moderadas de la izquierda mexicana, un deliberado intento por comprender un fenómeno complejo y ambivalente, respecto del cual es difícil tomar abiertamente partido. Esto se observa claramente en los méritos que el autor reconoce al PRD en el proceso de transición en el que los métodos de lucha y activismo

extra-institucional tuvieron un protagonismo decisivo.

Particular interés posee el análisis en torno a las discusiones sobre las definiciones ideológicas, en particular la confrontación interna en torno a la autoidentidad del PRD como partido de izquierda o socialista, lo que revela las dificultades de los partidos mexicanos en particular y latinoamericanos en general para asumir configuraciones ideológicas convencionales.

La cultura política de base del PRD es de origen priísta, y tiene un peso decisivo en su evolución y su estructura. Las tensiones entre el partido que pugna por constituirse en una organización moderna, democrática y de izquierdas por un lado, y el liderazgo de López Obrador y sus formas de organización por el otro constituyen un conflicto que parece imposible de resolver. Si triunfa la tendencia institucional de izquierda, el partido es amenazado por la caída en la irrelevancia. Si en cambio triunfan los liderazgos personales, el partido queda prisionero de una cultura política que rechaza y fracasa en su proyecto de modernización propia y del país.

Concebido —según la venerable terminología de Duverger— como partido de creación interna, es decir, desde el poder, el PRI combinó una organización de tipo monárquico-personalista con la disposición discrecional de los recursos públicos. El PRD, tal como lo entienden líderes como López Obrador y los que se alinean al modelo movimientista, es la continuidad de este modo de organización, pero sin los recursos del Estado.

El PRI, aun en la oposición, ha podido prescindir de esas formas tradicionales de organización porque ha tenido la base fundamental de su poder en los aparatos de los estados y el entramado de intereses relacionados e instituciones vinculadas. Por su parte, el Partido de Acción Nacional (PAN), de signo ideológico liberal

conservador, formado desde sus orígenes en la oposición al PRI, es la fuerza política que adopta las modalidades propias de un partido moderno. En materia de cultura política, el PRD no se encuentra en un extremo, sino entre el PRI y el PAN.

Tal como lo entendemos, el PRD no tolera bien la definición propuesta por Mossige, es decir, un híbrido partido-movimiento, sino que se trata más bien de un movimiento que entre sus estrategias de acción incluye las formas partidarias, las cuales pugnan por imponerse, hasta el momento sin éxito. Tampoco se observa, como sería de desear, una mejor contextualización de la historia del PRD en la perspectiva de la izquierda latinoamericana en las últimas décadas. Mossige descarta desde el principio el marco teórico que ofrecen las recientes teorías sobre el populismo y que pueden mostrar aspectos poco explorados del objeto de estudio. Tal parece que resulta imprescindible, para comprender la evolución y la dinámica de las fuerzas políticas en México, adoptar un ángulo más amplio, en el que las diversas identidades e instituciones se forman y se diferencian por relaciones de alteridad e interacción.

Héctor Ghiretti

(Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, Mendoza)

Isabella Margerita Radhuber: *Der plurinationale Staat in Bolivien. Die Rolle der Ressourcen- und Budgetpolitik*. Münster: Westfälisches Dampfboot 2013. 340 páginas.

La población campesino-indígena de Bolivia demanda —especialmente desde finales del siglo xx— cambios profundos en la sociedad y el Estado. La parte medular de estos cambios es la transformación del

Estado liberal-representativo en un Estado plurinacional. Este debe encabezar un nuevo modelo de desarrollo basado en una articulación renovada con la economía mundial.

Evo Morales, presidente de Bolivia, prometió en su primer mensaje a la nación, a sus compatriotas indígenas, la construcción de un Estado plurinacional que tendría como eje económico el sector del gas estatizado, además de nuevas estructuras económicas complementarias. Tal transformación estructural tendría como objetivo final que los indígenas (aproximadamente el 50% de la población) tendrían participación plena en el Estado, la economía y la sociedad en general.

Isabella Radhuber subraya en el prólogo de su libro como algo muy importante y sui géneris de Bolivia, el interés en todos los niveles por la política; además la participación permanente de la población para llevar adelante mediante debates políticos las transformaciones prometidas. En momentos de estancamiento del proceso, los grupos sociales movilizan marchas de protesta, huelgas de hambre u ocupaciones de edificios gubernamentales. Además, la autora trasunta que se siente como partícipe de estos debates intensos a causa de sus largas estancias en dicho país y su trabajo en el Ministerio de Hacienda de Bolivia.

Radhuber analiza en la publicación que nos acota —que es su tesis doctoral— la transformación democratizadora hacia el Estado plurinacional en base a las finanzas estatales y la política presupuestaria, ya que estas reflejan el carácter específico del Estado y sus fuerzas subyacentes. En los primeros capítulos, la autora discute las diferentes definiciones de Estado, el rol de las finanzas públicas y del ordenamiento de la economía, concluyendo que el Estado es la expresión y materialización de las fuerzas socio-políticas y sus interacciones, las cuales se organizan en diferentes niveles del espacio geográfico

y político-administrativo. El Estado boliviano tiene una relativa autonomía; sus finanzas y su política presupuestaria dependen en gran medida de la extracción/exportación de los recursos naturales y, por ende, de la volatilidad de los precios mundiales. Los ciclos y crisis mundiales de los productos primarios se reflejan en una creciente dependencia del Estado boliviano, situación que sus gobiernos tratan de romper con la nacionalización de los recursos naturales.

La autora da un breve resumen de la historia de las estatizaciones y de las privatizaciones en el sector extractivo, especialmente del petróleo y el gas, relacionándolas con las movilizaciones campesino-indígenas que se dirigen, sobre todo, en contra de las privatizaciones. Parte central es la política de estatización del gobierno de Evo Morales como base para la construcción del Estado plurinacional y la formación de la constelación de las fuerzas políticas. Esta ya comienza a perfilarse con la ley de instalación de la Asamblea Constituyente. A pesar del discurso oficial, hay desde el principio una discriminación de la población indígena en la Asamblea. Pues, el Estado da preferencia a las formas de organización partidaria para poder lanzar las candidaturas. Los indígenas contrarrestan esta selectividad estratégica en su contra con la fundación de un Pacto de Unidad campesino-indígena. En el transcurso de la Asamblea, las líneas de conflicto se desarrollan entre el partido gubernamental MAS y la oposición y, dentro de los movimientos sociales, entre el bloque indígena y el de los sindicatos. La oposición conservadora demanda autonomía departamental y el control sobre los recursos naturales; los representantes indígenas del Pacto de Unidad defienden como sus derechos la autonomía de los territorios y el control de los recursos naturales,

además de la representación directa en las instituciones estatales. Los representantes sindicales, en gran parte de las empresas estatales, abogan por una reforma estatal de carácter social.

La nueva Constitución contiene dos conceptos de nación: uno liberal y el otro, étnico-cultural. Basándose en los principios de pluralismo, igualdad y autorregulación, el modelo estatal plurinacional aspira a una coexistencia equitativa y de relaciones entre las diferentes formas de vida y de organización existentes de facto en Bolivia. Además, el modelo demanda la implementación de nuevas instituciones (y la correspondiente política de finanzas públicas) en los niveles autónomos departamentales, municipales, regionales e indígenas, interrelacionadas por medio de nuevas formas de coordinación. De acuerdo a la distribución de las competencias, debe realizarse una redistribución socio-económica entre los diferentes grupos étnico-sociales. Finalmente, debe desarrollarse un modelo económico plural que comprende, de acuerdo a la Constitución, las propiedades mancomunada, estatal, privada y sindical. La base financiera del proyecto plurinacional se debe asegurar con los ingresos creados por medio de las nacionalizaciones.

Radhuber subraya que la investigación muestra claramente que no solo las instituciones reflejan la constelación de las fuerzas políticas, sino sobre todo las finanzas públicas. Según las estadísticas presupuestarias de los años 2001 a 2011, que la autora elaboró en cooperación con Hacienda, tanto el rol del Estado en la economía como el rol del sector del petrogas aumentaron notoriamente. Paralelamente se intensificó la dependencia de los ingresos presupuestarios de este sector y se canalizaron más egresos a las empresas públicas. A la par, se destinaron más inversiones al sector transporte e infraestructura afines a las grandes empresas.

Muy al contrario de lo que Morales prometió con el modelo plurinacional, la participación de la población indígena en los ingresos primarios del Estado no aumentó, pues, en el sector formal prácticamente no se crearon nuevas fuentes de trabajo. Las transferencias sociales a los indígenas –la mayoría de ellos pobres– aumentaron; pero en parte fueron financiadas con fondos externos o redestinadas de otras fuentes. Además, la demanda indígena de autonomía sobre los recursos naturales entró solo en forma debilitada en la Constitución.

Radhuber concluye su trabajo señalando al final preguntas y temas de investigación: incluir la economía informal de los indígenas en el área fiscal; investigar la base material de las fuerzas políticas; explorar el grado de penetración de los conflictos políticos en el aparato estatal.

Concluyendo: el libro de Isabella Margerita Radhuber enriquece la literatura e investigación sobre los indígenas y, por ende, el debate político y social sobre este tema.

Mechthild Minkner-Bünjer
(German Institute of Global and Area
Studies, GIGA)